

Santiago, veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

La causa RUC N° 2010063172-6, RIT 113-2024 del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, sobre estafa del artículo 468 en relación con el artículo 467 inciso final y el delito de administración desleal del artículo 470 N° 11, todos, del Código Penal.

Y, en lo concerniente al recurso de nulidad interpuesto, la sentencia definitiva de diez de febrero de 2025 emitida por dicho tribunal, que decidió absolver al acusado **Esteban Alexis León Bustos** de ser el autor del delito de estafa en concurso con el de administración desleal, antes referidos; y que, además, absolvió a los acusados **William Manuel Cisterna Silva** y **Roberto Alexi Navia Olivares** de ser los autores del delito de estafa también ya mencionado.

Contra dicho fallo, la parte querellante de Gabriel Antonio Sandoval Palacios interpone recurso de nulidad esgrimiendo como única causal la prevista en la letra e) del artículo 374 en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos, del Código Procesal Penal, al infringir los principios lógicos de razón suficiente o fundamentación, valoración de la prueba y no contradicción.

En relación con la causal invocada, el recurso pide -en concreto- que se lo acoja, y se declare la invalidación del juicio oral y de la sentencia, ordenando retrotraer la causa al estado de realizarse ante el Tribunal de Juicio Oral no inhabilitado que corresponda, una nueva audiencia de juicio oral.

El recurso de nulidad fue declarado admisible, fijándose audiencia para su vista efectuada el día 8 de abril de 2025, en la que fueron oídos los alegatos de los cuatro intervinientes que comparecieron a estrados, y en que se fijó para lectura del fallo el día de hoy.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso invoca como causal de anulación la que contempla la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en



relación con los artículos 342 letra c) y 297 del mismo Código. Funda la misma alegando que, en relación con el artículo 297 del mismo cuerpo legal, la sentencia vulnera los principios de la lógica, razón suficiente, fundamentación y no contradicción, los que desarrolla en tres motivos diferentes bajo la misma causal.

El recurso, en primer término, reproduce los hechos de la acusación a los que adhirió en su calidad de querellante. Luego, sostiene que la situación en el juicio en examen viene dada por el hecho que, desde un principio, los acusadores señalaron al tribunal que la acreditación de los hechos recaería en prueba indiciaria, lo que a juicio del recurrente sería suficiente para acreditar los hechos materia de la acusación. Sin embargo, sostiene, al establecer la insuficiencia probatoria y absolver a los acusados, los sentenciadores habrían vulnerado el principio de la lógica de la razón suficiente, y el de no contradicción, al no concurrir en la especie todos los elementos necesarios para absolver.

Tras aludir al tratamiento de la prueba indiciaria, circunstancial o indirecta efectuado por la sentencia recurrida, plantea que el tribunal no estableció la forma en la cual podría arribar a la convicción condenatoria necesaria con ese tipo de prueba. Afirma el recurso que, para los sentenciadores del grado, sería una premisa el ser posible declarar probado un hecho principal a través de un razonamiento construido sobre la base de otros hechos, los indicios, siempre que éstos reúnan una serie de condiciones, concretamente, que el razonamiento se apoye en elementos de hecho y que éstos sean varios, que estén acreditados, que se relacionen reforzándose entre sí y, desde el punto de vista formal, que el juicio de inferencia pueda considerarse razonable y que la sentencia lo exprese de esa manera.

Sin embargo, en cuanto a la infracción de los principios de la razón suficiente y a la falta de fundamentación, señala que el tribunal *a quo* refirió -como premisa- que la única fuente de información sería el mismo querellante, sin contar con otros elementos de corroboración que permitan



sustentar la tesis de los acusadores. Sin embargo, sostiene el recurso, los dichos del querellante Sr. Gabriel Sandoval Palacios son corroborados por el testigo presencial del hecho que marcó el inicio de la investigación, el Sr. Rodolfo Venegas Molina, en relación con un correo electrónico entre los querellados Roberto Navia Olivares y Esteban León Bustos, cuya existencia jamás se discutió y del cual desprende el abultamiento de un presupuesto y la posterior distribución del exceso entre ellos. Así, continúa el recurrente, el tribunal no explica de qué manera este hecho no estaría corroborado, estimando que se aleja sin explicación de su propia premisa.

Continúa el recurso, planteando que los acusadores establecieron una secuencia de hechos indiciarios del delito de estafa que comprendió el abultamiento y posterior reparto del exceso entre los acusados, el cobro de servicio pagados y no comprendidos en la orden de compra original, así como la falta de su registro por parte del acusado Esteban León Bustos, y la emisión simultánea de las facturas Nos. 63, 64 y 65 en una misma fecha y sin respaldo de haber sido notificadas, enviadas -en cambio- por el acusado Williams Cisterna Silva a un tercero, la empresa Tecnofast, con la única finalidad de presionar para su pago.

En relación con el perjuicio patrimonial causado, refiere el recurso, que el tribunal del grado se limitó a valorar separadamente las facturas ya referidas y finalmente no pagadas.

Por último, también funda la causal de invalidación en la infracción al deber de valoración de toda la prueba rendida y al de fundamentación de las sentencias, conforme a lo dispuesto por los artículos 342 letra c) en relación con el artículo 297, ambos del Código Procesal Penal. Conforme a ellos, sostiene, al dar por probados o no los hechos y sus circunstancias, la decisión del tribunal ha de ser clara, lógica y completa, su exposición no debe ser confusa o ininteligible, tampoco contradictoria y no puede omitir hechos relevantes y probados en relación con la controversia y, para arribar a sus conclusiones, ha de valorar la totalidad de la prueba rendida, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y



los conocimientos científicamente afianzados, de tal modo que el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones sea reproducible. En este orden de ideas, el recurso sostiene que, habiendo declarado la víctima y los acusados como medio de defensa, los sentenciadores de la instancia se limitaron a transcribir sus dichos, omitiendo la sentencia toda valoración de dichos medios de prueba.

SEGUNDO: Que, para la adecuada inteligencia del arbitrio deducido, es preciso tener presente la lata relación de hechos con que el Ministerio Público y la querellante sostuvieron acusación, reproducida en el considerando segundo del fallo que se revisa.

TERCERO: Que el querellante dedujo recurso de nulidad, denunciando como motivo absoluto, el previsto en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) y con el artículo 297, ambos, del mismo texto legal, por considerar que los sentenciadores han faltado a los deberes de fundamentación o razón suficiente, no contradicción y debida valoración de la prueba rendida, con la consecuencia de haber absuelto a los acusados; por lo que cabe a esta Corte abocarse a examinar, enseguida, cada uno de los fundamentos de la única causal de invalidación esgrimida.

CUARTO: Que la causal de nulidad invocada se hace consistir, en primer término, en una supuesta infracción a lo dispuesto en los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, por falta de fundamentación y errónea valoración de la prueba rendida, lo que -a juicio de la recurrente- habría determinado una sentencia absolutoria que debe ser invalidada.

QUINTO: Que, en lo que atañe a la alegada falta de fundamentación, del tenor íntegro de la sentencia impugnada se desprende que el tribunal de primer grado cumplió con el deber de fundamentación exigido por la ley, exponiendo con claridad y latamente las razones jurídicas y fácticas que le llevaron a concluir que la prueba rendida no alcanzó a generar el grado de convicción exigido por el artículo 340 del Código Procesal Penal para dictar una sentencia condenatoria.



SEXTO: Que la causal de nulidad invocada se hace consistir, en segundo término, en una supuesta contradicción incurrida por los sentenciadores al admitir como premisa la validez y suficiencia de prueba indiciaria, para luego desconocerla al valorar la rendida y, en consecuencia, resolver la absolución de los acusados; contradicción que -a juicio de la recurrente- determinaría la necesidad de invalidar la sentencia.

Que, a diferencia de lo que sostiene el recurso, no resulta contradictorio que el tribunal de juicio oral haya reconocido expresamente la validez de la prueba indiciaria como forma legítima de acreditar los hechos en materia penal; y que, al mismo tiempo, haya concluido que los indicios aportados en la especie no alcanzan el estándar de convicción más allá de toda duda razonable exigido para desvirtuar la presunción de inocencia, toda vez que esta conclusión constituye un ejercicio legítimo de valoración probatoria y no puede ser sustituida por una mera discrepancia interpretativa de la parte querellante.

SÉPTIMO: Que la causal de nulidad invocada se hace consistir, en tercer término, en una inapropiada valoración de la prueba indiciaria rendida.

A fin de zanjar el argumento planteado en el recurso, en primer término y contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, la sentencia recurrida contiene un análisis extenso y detallado de los medios de prueba aportados por las partes, en especial de los indicios ofrecidos como sustento de la tesis acusatoria, evaluando críticamente su contenido, su relación con los hechos y su capacidad demostrativa, conforme a los principios de la sana crítica.

Y con ese mismo fin, en segundo término, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la controversia; sin que sea dable que esta Corte, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de las probanzas rendidas o fije hechos distintos a los



determinados por el tribunal del grado, porque ello quebrantaría de manera evidente los principios de oralidad, intermediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en el sistema procesal penal.

OCTAVO: Que, en relación con la evaluación crítica de la prueba indirecta aportada y la necesidad de que los indicios sean múltiples y consistentes, como es posible desprender de los antecedentes y explica acertadamente la sentencia recurrida, la investigación a cargo del Ministerio Público -coadyuvada en lo pertinente por la parte querellante- no sólo presentó deficiencias relevantes en cuanto a la producción de elementos de prueba directa; sino, aún más importante, también en la sistematización e interconexión de los indicios ofrecidos, de tal manera de articular una hipótesis coherente y sustentada precisamente en todos ellos, lo que incidió directamente en el resultado del juicio oral y en la imposibilidad de alcanzar una convicción condenatoria.

NOVENO: Que, por tanto, no habiéndose acreditado infracción a las exigencias de fundamentación, no contradicción y valoración de medios de prueba que haya tenido influencia sustancial en lo dispositivo, no concurre en la especie la causal legal de nulidad invocada; y, por lo mismo, el recurso deberá ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 360, 372, 376 inciso segundo, 379, 383 y 384 del Código Procesal Penal, se declara que:

Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Rodrigo Hermosilla González, en representación del querellante Gabriel Sandoval Palacios, en contra de la sentencia definitiva de 10 de febrero de 2025, dictada por el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en la causa RUC N° 2010063172-6, RIT 113-2024 la que, en consecuencia, no es nula.



Regístrese y comuníquese a los intervinientes en la audiencia fijada, sin perjuicio de su notificación por el estado diario; hecho, devuélvase.

Redacción del abogado integrante Sr. Rafael M. Plaza Reveco.

Penal N° 1001-2025.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XURXXUXZBUE

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M., Ministro Suplente Luis Avilés M. y Abogado Integrante Rafael Mauricio Plaza R. Santiago, veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintiocho de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XURXXUXZBUE